



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

EXPTE: 51.707/2019

“HUENTEMIL S.A. c/ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Sentencia Definitiva

En la Ciudad de Buenos Aires, reunidos los Señores Magistrados integrantes de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar pronunciamiento en la presente causa se procede a emitir el voto en el siguiente orden:

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

HUENTEMIL S.A. cuestiona la Resolución de AFIP N° 1.433 del 31/07/2018, que al rechazar un anterior pedido de revisión ratifica una deuda de \$ 1.725.869,56 (comprensivo de capital e intereses) por entender que existió una incorrecta utilización de los beneficios previstos en la ley 26.940, durante el periodo comprendido entre el 03/2015 a 08/2016 y también reclama \$ 357.761,40 en concepto de multa con base en el art. 16 de la R.G 1566 (t.o. 2010).

La impugnante rechaza la pretensión fiscal argumentando que el acto atacado carece de motivación en los términos del art. 7° de la ley 19.549, máxime que la determinación se efectuó sobre base presunta y la prueba testimonial se llevó a cabo sin su presencia y sin juramento de decir verdad. Sostiene que el beneficio que le concede la ley 26.940 es procedente pues Huentemil SA no es continuadora de Giaconi y Martínez SA y la transferencia de personal solo evitó la pérdida de puestos de trabajo aprovechando la mano de obra calificada. Por otra parte, se plantea la inconstitucionalidad de los arts. 15 de la ley 18.820, 12 de la ley 21.864 y 39 bis inciso b) del Decreto ley 1.285/58 pues entiende que no cabe subordinar el acceso a la justicia al previo pago del importe reclamado por resultar lesivo de su derecho de defensa (art.18 CN). Afirma que la suma pretendida es desproporcionada con respecto a su concreta capacidad económica, y que tiende a empeorar debido a la grave crisis por la que atraviesa nuestro país en materia económica. Al efecto acompaña una certificación contable, donde se expresa que con base en un balance cerrado al 30.09.18, libros inventario y balance, saldo bancario y demás papeles de trabajo Huentemil SA no puede afrontar el pago de la suma de \$ 2.083.630,96. Ofrece prueba contable ratificatoria de lo anterior.

El organismo rechaza el argumento de su contraria por entender que no constituye una verdadera expresión de agravios. Expresa asimismo que la resolución impugnada no carece de motivación toda vez que remite al dictamen

Fecha de firma: 07/05/2024

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#33623172#393003171#20240506133518376



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

jurídico 87/2018 donde se explican las razones que llevaron a su dictado. Por otra parte refiere que el ajuste no se efectuó sobre base presunta, sino en virtud de los datos que surgen de las propias declaraciones juradas del SUSS presentadas por la inspeccionada.

Desde el punto de vista procesal el recurso debe ser declarado viable.

Si bien la regla “solve et repete” ha sido considerada constitucionalmente valida por el Superior Tribunal de la Nación (ver CSJN 30/04/74 “Adelphia SAIC s/sumario” Fallos 288:287; 21/12/89 “Micrómnibus Barrancas de Belgrano” Fallos 312:2490) el apelante acompañó un informe contable demostrativo que no se encontraría en condiciones económicas de satisfacer el depósito previo y, ante dicha situación, se impone la intervención del Poder Judicial a fin de salvaguardar derechos concedidos a los justiciables en virtud de lo dispuesto en los arts. 17,18 y 109 de nuestra Carta Magna.

En cuanto al fondo del tema sometido a juzgamiento, y pese a las objeciones efectuadas por la recurrente respecto a lo que considera un accionar abusivo de parte de AFIP y la violación de su derecho constitucional de defensa en juicio, no advierto que lo decidido en la instancia administrativa deba ser modificado.

Ello por cuanto la apelante no controvierte uno de los argumentos básicos que llevó al organismo a considerar que HUENTEMIL SA es continuadora de la empresa Giaconi y Martínez SA. Ello con base en que dos de las integrantes de HUENTEMIL SA son los cónyuges de las personas que fueron directivos de Giaconi y Martínez S.A. (ver fs. 518).

Cabe recordar que en nuestro sistema positivo, en forma paralela a las personas físicas, coexisten las denominadas personas jurídicas, ideales o ficticias, a las que el legislador reconoce personalidad propia, no obstante desde el punto de vista práctico nos encontramos ante un medio técnico utilizado para posibilitar que las personas físicas que integran entes ficticios puedan realizar operaciones económicas en forma organizada y lícita sin correr grandes riesgos económicos.

La persona ideal goza de personalidad jurídica a fin de favorecer el intercambio de bienes y servicios, limitando la responsabilidad de los sujetos que la integran (ver Poclava Lafuente, Juan C. y González, Ricardo Oscar (h) “Personalidad Jurídica” pág. 6, edit. La Ley) por lo que nos encontramos ante una técnica de simplificación que se estima socialmente valiosa (conf. López Mesa, Marcelo J. y Cesano, José Daniel “El abuso de la personalidad jurídica de las sociedades comerciales” pág. 31, edit. Depalma).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

No puede ignorarse que la personalidad jurídica se ha utilizado muchas veces para disimular patrimonios, eludir el cumplimiento de las leyes y burlar los derechos de terceros, ello así y dado que la ley no ampara el ejercicio abusivo de derechos, considerando tal aquel que contrarie los fines que aquella tuvo en miras al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres (conf. art. 10 Cód. Civ. y Ccial de la Nación) es que se acepta el corrimiento del velo corporativo o atribución de una responsabilidad patrimonial común cuando se advierten vínculos societarios entre entidades independientes.

El legislador admite la existencia de personas jurídicas, pero lo hace con el objeto de permitir que algunas personas físicas encaucen sus actividades económicas bajo la forma de un patrimonio de afectación -capital societario- sin correr, en forma personal, grandes riesgos patrimoniales lo que les impone, paralelamente, una mayor responsabilidad social en el cumplimiento de sus obligaciones frente a terceros. En otras palabras, detrás de todo ente societario, se ocultan personas físicas que, en el caso que nos ocupa, son dos matrimonios que, como representantes de diferentes empresas, encubren su actividad económica personal para terciar en el mercado de consumo.

La doctrina, al analizar el tema refiere que la forma instrumental de la persona jurídica creada para servir a las relaciones entre los hombres, pierde significación cuando su uso se desvía de los fines admitidos por la ley y se convierte en un abuso cuando se llega a aplicarlo a otros distintos y aun contrarios a lo prescripto por el legislador (Vázquez Vialard, Antonio L.R. “La aplicación de la teoría de la desestimación de la forma de la personalidad jurídica en el derecho del trabajo” TSS 1973/4 pág. 621; Pirolo, Miguel A. “Síntesis de la teoría de la penetración en la personalidad en la doctrina y la jurisprudencia” DT 1985-A-483), ello es así por cuanto el régimen de la personalidad jurídica no puede utilizarse en contra de los intereses superiores de la sociedad ni los derechos de terceros (Llambias, Jorge J. “Tratado de Derecho Civil-Parte General” TºII pág.53, Abeledo Perrot) pudiendo el magistrado actuante prescindir de la personalidad jurídica que posee la sociedad, sin que ello implique la extinción de la personería, sino solo un “apartamiento” de la misma destinada al aseguramiento de la justicia o la equidad al irse directamente a la realidad de los hechos (Martorell, Ernesto E. “Conflictos de trabajo en las sociedades comerciales” TºI pág. 186 edit. Hammurabi).

A lo anterior debemos agregar que en la realidad económica muchas veces es el grupo familiar el que controla dirige y administra una empresa que le sirve de rédito económico (ver Favier Dubois, Eduardo M. (h) y Spagnolo, Lucía





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

“Sociedad por acciones simplificada y empresa familiar” pág. 31 edit. Ad-Hoc), y en el caso a estudio surge una amplia vinculación de las dos entidades involucradas atento las personas de sus dirigentes, quienes exteriorizan la voluntad societaria ante terceros.

Por último, y sobre la imposición de costas, un nuevo análisis de la cuestión planteada me lleva a coincidir con el criterio observado en este aspecto por la Sala I de esta Cámara (conf. “Distribuidora Primero de Septiembre SRL c/AFIP” sent. del 22/09/2022) por lo que propiciaré que las mismas sean impuestas en el orden causado.

En virtud de lo expuesto propongo: 1º) Habilitar la presente instancia judicial, 2º) Confirmar la resolución recurrida, 3º) Imponer las costas en el orden causado (art. 68 2do párrafo del CPCCN).

EL DOCTOR JUAN A. FANTINI ALBARENQUE DIJO:

Disiento con el voto de mi colega preopinante respecto del análisis de los requisitos de admisibilidad a fin de poder ingresar en el fondo de la cuestión.

En cuanto a la falta de cumplimiento del requisito de depósito previo cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, admitió en reiteradas oportunidades la validez constitucional de la exigencia del pago previo de la deuda determinada por la autoridad administrativa, como requisito previo a la intervención judicial (cf. doctrina de Fallos 155:96; 162:263; 235:479; 238:418; 296:57; etc.). Sólo justificó apartarse de la imposición legal, en casos de montos excepcionales, en que el requisito en cuestión pudiera constituir un obstáculo insalvable para la revisión de la pena por los tribunales de justicia, fundándose en el derecho de defensa del art. 18 de la Constitución Nacional (sea porque ese pago generaría un importante desapoderamiento - Fallos, 247:181 ; 205:208 y su cita-, sea por la falta comprobada e inculpable de los medios para afrontarlo -Fallos, 256:38; 261:101-, sea porque se revele un inmediato e inequívoco propósito persecutorio o desviación de poder -Fallos 288:287; 308:381-).

Sin embargo, esta excepción sólo es aplicable cuando “las constancias de autos no permitan descartar, por caprichosa, la dificultad alegada para la satisfacción inmediata de la multa impuesta”, exigiendo que tal imposibilidad encuentre sustento en elementos objetivos de criterio agregados a los autos, estimando insuficientes a estos efectos las manifestaciones en abstracto del interesado (cf. C.S.J.N., Fallos, 225:201; 249:221; etc.).

Con lo cual, toda vez que resultan insuficientes tanto las manifestaciones vertidas por la administrada como la certificación profesional contable sobre imposibilidad de pago acompañada en autos, tendientes a demostrar la alegada





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

situación de imposibilidad de pago inculpable del depósito previo exigido por la ley, lo cual sólo podría lograrse mediante dictámenes actuariales integrales que conduzcan al convencimiento por parte del tribunal de que dicho impedimento es real y actual; requisitos que no veo cumplidos con la certificación obrante a fs. 552/553, toda vez que la misma únicamente se limita a certificar una situación contable al 31/10/2018 sobre la base de documentos exhibidos por HUENTEMIL S.A., de los cuales únicamente surgiría la carencia de liquidez al momento de la elaboración de esa certificación conforme la documentación exhibida, como bien señala el Sr. Representante del Fisco con fecha 07/08/23.

Por razones señaladas, entiendo que la documentación acompañada no alcanza a convertirse en un legítimo sucedáneo válido del seguro de caución que supo admitir la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (V. Fallos: 331:2480). Por ello, corresponde declarar formalmente inadmisibile el recurso de apelación interpuesto.

Finalmente, y de acuerdo al principio general contenido en el art. 68 del C.P.C.C.N. y el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Cooperativa Eléctrica Azul Ltda. c/Administración Federal de Ingresos Públicos- D.G.I.”, sentencia del 05/10/04 -en la que remite a los fundamentos vertidos por la minoría en los precedentes “Farmacia España” (Fallos 323:1557) y “Asociación de Trabajadores del Estado” (Fallos 323:2349)-, deben imponerse las costas al recurrente vencido.

Con respecto a la regulación de honorarios que imponen los artículos 163 y 164 del C.P.C.C.N., cabe tener presente que la Ley 27.423 no puede ser aplicada en autos en forma mecánica, dado que dicho texto legal no contempla expresamente el proceso de impugnación de deuda. Ello así, teniendo presente lo expresado por el Superior Tribunal de la Nación, en cuanto a que la regulación de honorarios, no debe depender exclusivamente del monto del reclamo, sino que deberá ser ponderado por los jueces, bajo pautas de razonabilidad, atendiendo a la naturaleza, complejidad del asunto, mérito de la causa, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado (Fallos 257:142; 296:126; 302:534 y sus citas, 320:495; 339:216; entre otros) y lo dispuesto por el artículo 1255 del Código Civil y Comercial de la Nación y lo establecido por el Alto Tribunal en “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa” Sentencia del 4 de septiembre de 2018, se regulan los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte actora en 2 UMA -equivalente a \$ 98.150- y los de la demandada en 4 UMA -equivalente a \$ 198.300- (conf. C.S.J.N. Acordada 1/2024 y Res. SGA n° 925/2024). Importes a los que se adicionara el IVA en caso de corresponder (cfr. Excma. C.S.J.N.

Fecha de firma: 07/05/2024

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#33623172#393003171#20240506133518376



Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

“Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación”, sent. Del 16/06/93, Fallos 316:1523).

Por las razones expuestas es mi voto: 1º) Declarar formalmente inadmisibile el recurso de apelación interpuesto, 2º) Imponer las costas a la recurrente vencida (art. 68 C.P.C.C.N.), 3º) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en 2 UMA -equivalente a \$ 98.150- y los de la demandada en 4 UMA -equivalente a \$ 196.300- (conf. C.S.J.N. Acordada 1/2024 y Res. SGA n° 925/2024). Importes a los que se adicionara el IVA en caso de corresponder.

EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:

Adhiero al voto de la Dra. Nora Carmen Dorado.

En virtud de todo lo expuesto el Tribunal, por mayoría, RESUELVE: 1º) Habilitar la presente instancia judicial, 2º) Confirmar la resolución recurrida, 3º) Imponer las costas en el orden causado (art. 68 2do. Párrafo CPCCN). Regístrese, notifíquese, publíquese y, oportunamente, remítase.

JUAN FANTINI ALBARENQUE
Juez de Cámara

NORA CARMEN DORADO
Juez de Cámara

WALTER F. CARNOTA
Juez de Cámara Subrogante

Ante mí: AMANDA LUCÍA PAWLOWSKI
Secretaria de Cámara

ALP.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

